

Encrucijada de la gobernanza global

La Organización de Shanghai propone “reformular el sistema de gobernanza global”.

La libertad no alcanza

El Gobierno anunció la intervención del Tesoro en el mercado para frenar la corrida cambiaria.

tribuna

Edición 161 | 8 de septiembre de 2025 | Villa María - Córdoba | Periódico quincenal

6
AÑOS

MOVIMIENTO - 39.000 trabajadores industriales menos desde noviembre del 2023.

Cesanteados y sin salarios



EXTORSIÓN. Los operarios de cosechadoras Vasalli no cobran desde hace tres meses.

Los conflictos de trabajadores del sector industrial no paran de emerger en un contexto de crisis económica.

El estancamiento de la economía para algunos sectores industriales y pymes golpea a los trabajadores que reciben como respuesta la paralización de fábricas, despidos, flexibilización y suspensiones para mantener operativas las empresas.

En agosto Acindar (Grupo ArcelorMittal), una de las principales productoras de acero laminado ubicada en Villa Constitución, avanzó con la suspensión de cientos de trabajadores.

El total de afectados supera los 500 empleados, algunos por 72 horas y otros por una semana. Se trata de una decisión que repercutió en 350 operarios de la acería; 100 del tren laminador N°3; y 85 obreros del tren

laminador N°1.

Otro conflicto sucede al norte de la provincia de Buenos Aires, en la localidad de San Nicolás, donde está ubicada la mayor planta productora de acero del país, Ternium Siderar (Grupo Techint).

Los salarios de pobreza, la precarización laboral y el despido de 200 trabajadores de Loberaz, empresa contratista a la cual Ternium le rescindió el contrato, rebalsaron el vaso.

En ese marco la realización de asambleas y paros rotativos escalaron a una movilización que involucró a más de 1.200 trabajadores metalúrgicos. La marcha partió desde la puerta de la fábrica hacia la plaza Mitre de San Nicolás.

Allí, hubo acto y discurso de

parte de la dirigencia sindical que embatió contra el plan económico del gobierno y el accionar de las empresas contra los trabajadores.

Previamente, la empresa había decidido apagar el alto horno, hecho que solo se realiza en casos esporádicos por tareas de mantenimiento.

Según construye La Capital, el Concejo Deliberante de San Nicolás se pronunció en contra de la medida al considerarla como una forma de extorsión destinada a quebrar la protesta.

Los trabajadores plantearon en un comunicado que “(Paolo) Rocca [CEO de Techint] mantiene a los trabajadores con salarios de hambre, y Milei lleva a la industria nacional a la crónica de una muerte anunciada”.

Por su parte, Luis Sánchez, dirigente de UOM San Nicolás, señaló a Diario El Norte que esta movilización marca “un puntapié inicial para un reclamo que se va a hacer nacional”.

Otro de los sectores afectados por la apertura de importaciones es la industria de maquinaria agrícola. Por caso, en la provincia de Santa Fe, en la localidad de Firmat, se encendió el conflicto en la fábrica de cosechadoras Vasalli.

Allí, 280 trabajadores reclaman salarios que la firma les adeuda. Las autoridades les ofrecieron el pago parcial de \$400.000 por trabajador, correspondiente a salarios de junio, julio y aguinaldo, lo que fue rechazado. Aún continúan de paro, con acampes frente a la fábrica y cortes programados de ruta.

Reunión de gremios industriales

Más de 40 sindicatos industriales se reunieron la semana pasada para denunciar la crisis del sector en la sede del sindicato del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA).

Los gremios nucleados en la Confederación Industrial de Sindicatos de la República Argentina (CISRA) presentaron un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) para graficar la realidad.

El relevamiento repasa diferentes ejes como caída en la actividad económica y comercial, paralizaciones, huelgas, encarecimiento del crédito por altas tasas de interés, entre otros.

Del mismo se desprende que 52,2% de los industriales asegura que mantienen sin uso “al menos el 40% de su capacidad instalada”. Mientras que un 56,5% reconocieron haber ofrecido retiros voluntarios a sus empleados.

Desde noviembre de 2023, 1.482 empresas manufactureras cerraron de las 49.622 que estaban en actividad. Además, para el mismo periodo el conjunto del sector industrial registró 39.016 puestos de trabajo menos que sube hasta los 97.130 si se añade construcción y minería.

Finalmente, los gremios industriales consideraron que en este esquema se “privilegian las finanzas en detrimento de la producción nacional y el trabajo argentino”.

EDITORIAL

Una medida contundente

Los sectores dominantes no titubean sobre lo que tienen que hacer en su pelea por apropiarse de las ganancias que les garantiza el programa de gobierno.

En ese sentido, hace tiempo quedó desenmascarada la mentira sobre la “libertad del mercado para regularse” o de la “lucha contra la casta”.

Una tras otra, las medidas adoptadas hasta el momento han convalidado a sus ganadores y perdedores.

De hecho, la semana pasada el Tesoro vendió más de 500 millones de dólares en menos de una semana para contener el precio del dólar. Es decir, como la libertad del mercado no alcanza para autorregularse, deciden intervenir.

La repercusión concreta es la utilización de los recursos públicos para favorecer la renta que les genera a los fondos de inversión la bicicleta financiera.

Los 10 puntos de la UIA reflejan su posicionamiento sobre el rumbo tomado asumiéndose como perdedores de esas medidas, subrayando la crítica situación que representa el encarecimiento del crédito financiero.

En un país donde se pagaron 56 billones de pesos por intereses de deuda hasta julio, mientras que el valor del salario mínimo quedó fijado en \$322.200, evidentemente se utiliza el precio del salario como ancla cambiaria con el “pretexto” de que no se dispare la inflación.

El problema es que todos reclaman que el gobierno los escuche, pero está claro que sus intereses responden a otra fracción. Por lo cual, más que susurrales recomendaciones es una necesidad realizar una medida contundente del movimiento para torcer el rumbo.

INDUSTRIA - En junio, el uso de la capacidad instalada fue de apenas 58,8% (CEPA).

Cola de león

Frente al continuo cierre de empresas y la caída del crédito financiero, la Unión Industrial Argentina (UIA) se limita a destacar la “macro” y presentar pedidos para “nivelar la cancha” a través de la reducción de impuestos y el costo laboral.



FRANCOS. El funcionario se sinceró: “sabemos que hay temas pendientes para esta segunda etapa”.

La presentación se dio el martes pasado en la ciudad de Córdoba, en el 17° Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba (UIC), evento que se desarrolló bajo el lema “Competir, invertir, integrar: el tridente del desarrollo”, y en el marco de la conmemoración del Día de la Industria.

Luis Macario, presidente de la UIC, en su rol de anfitrión, comenzó el acto enumerando los “logros” de la actual gestión nacional, entre los que incluyó “reducción de la inflación, equilibrio fiscal, normalización parcial, mejora y avances en la legislación laboral, desburocratización”, y la “reducción” del riesgo país.

Además, destacó que “la macroeconomía entró en una etapa de racionalidad” para dar paso a sus pedidos al Gobierno: reformas impositivas y laborales. “Necesitamos menos impuestos y, sobre todo, mejores impuestos”, afirmó. Al tiempo que advirtió sobre la

regresividad del IVA, los tributos distorsivos y los costos laborales que “fomentan la informalidad” y “encarecen la vida de todos”.

Desde el Gobierno Nacional, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respondió que la gestión “recién está solucionando los problemas más urgentes de la Argentina, como la estabilidad de la macroeconomía”. A su vez admitió que “es cierto que no hemos eliminado muchos impuestos, pero lo que hemos eliminado afecta tanto a la Nación como a las provincias”.

En este marco, el gobernador Martín Llaroya anunció que enviará un proyecto de ley a la Unicameral para un régimen simplificado de promoción industrial, para que las industrias que facturen hasta \$3.200 millones anuales tengan 0% de Ingresos Brutos.

El Índice de Producción Industrial (IPI) del INDEC cayó 1,2% en junio, lo que representa una caída de 6,6% en relación con el promedio de 2023.

Visita de Villarruel

Por otro lado, la vicepresidente Victoria Villarruel recorrió la planta de neumáticos de FATE y se reunió con su presidente, Javier Madanes Quintanilla, y su equipo

directivo, quienes le “comentaron acerca de la actualidad de la empresa y de su producción”.

Durante su visita, la funcionaria fue interceptada por integrantes

Los 10 puntos de la UIA

En el evento, el presidente de la UIA, Martín Rapallini, presentó los diez puntos de su denominado “Decálogo del Nuevo Contrato Productivo” para “construir confianza, atraer inversiones y sostener políticas industriales estables”.

“Necesitamos un Estado que asuma un rol, que garantice las condiciones productivas. Queremos que se nivele la cancha, la industria argentina puede y sabe competir. Tenemos que discutir seriamente qué significa tener una política industrial”, aseguró Rapallini.

“Decálogo del Nuevo Contrato Productivo”

LOS 10 PUNTOS:

- Seguridad jurídica
- Orden macroeconómico
- Sistema impositivo competitivo
- Reforma laboral
- Federalismo productivo
- Educación en tecnología
- Infraestructura y logística
- Financiamiento productivo
- Sustentabilidad
- Inserción global inteligente

del SUTNA, quienes le entregaron una carta reclamando la reincorporación de todos los despedidos y una “resolución inmediata” a la paritaria sectorial.

ANÁLISIS - EE.UU. busca recobrar la iniciativa en el continente.

Latinoamérica en la disputa global

Tras la cumbre de Alaska, reunión en la que participaron los mandatarios de Rusia, Vladimir Putin, y EE.UU., Donald Trump, se intensificó el movimiento armamentístico en la región.

Aunque lo único que se conoce es que ambos países pactaron “robustas garantías de seguridad”, existen indicadores de que Rusia está dispuesta a ceder su influencia en territorio latinoamericano a cambio de una paz negociada en Ucrania. China, por su lado, no quiere ceder ante el avance estadounidense.

Despliegue militar

Luego del encuentro con el mandatario ruso, EE.UU. avanzó con premura moviendo sus tropas al Caribe: el 19 de agosto zarparon desde el país 4.000 soldados en tres buques con el objetivo de combatir el narcotráfico que aparentemente saldría del sur hacia el país norteamericano, según una comunicación oficial.

Su objetivo implicaba coordinar desembarcos en México, Panamá y la isla de Curazao, a sólo unos kilómetros de Venezuela. Unas semanas más tarde anunciaron el incremento de su presencia con un crucero de misiles guiados, llamado USS Lake Erie, y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, llamado USS Newport News.

En respuesta, el titular de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, dijo que comenzaron “un despliegue importante con drones”, “recorridos fluviales con la Infantería de Marina por todos los ríos”, “patrullas navales en el Lago de Maracaibo, en el Golfo de Venezuela, y buques de mayor porte, más arriba al norte, en nuestras aguas territoriales”.

Además, el presidente Nicolás Maduro anunció el reclutamiento masivo de “fuerzas populares” para alcanzar el objetivo de 4,5 millones de milicianos en respuesta a las “amenazas” de Estados Unidos.

China mostró su desacuerdo con la operación llevada a cabo por EE.UU. Mao Ning, portavoz del Ministerio de Exteriores, dijo en una conferencia de prensa que se opone “a que potencias externas interfieran en los asuntos internos de Venezuela



MILITARIZACIÓN. México, Panamá y Curazao cooperaron en las operaciones.

Las grandes potencias luchan por su influencia y control del territorio. EE.UU. movilizó tropas y armamento en el Mar Caribe, cerca de la costa de Venezuela.

bajo cualquier pretexto”.

De esta manera se recrudecen aún más las tensas relaciones entre ambos países luego de la reciente disputa por los aranceles, cuestión que se mantiene calma debido a la tregua temporal alcanzada mediante acuerdos.

EE.UU. hace tiempo que viene realizando operaciones militares de este tipo en la zona del Caribe, por ejemplo, en junio con la visita de soldados estadounidenses a Panamá para realizar ejercicios militares con el objetivo de proteger el canal interoceánico, en el marco de una “creciente influencia china”, según había declarado su presidente Donald Trump.

Con el motivo de movilizar tropas hacia el país panameño, el secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth, dijo que “Estados Unidos no permitirá que China o algún otro país amenace el funcionamiento de la vía de navegación comercial”.

Preparación del territorio

En los últimos meses, bajo pretexto de la seguridad y el combate al crimen organizado, el Comando Sur, parte del ejército norteamericano destinado al Caribe y Sudamérica, también realizó acuerdos con los ejércitos de Ecuador, Paraguay, Perú y

Chile.

El pasado 20 de agosto, el almirante Alvin Holsey, jefe del Comando, participó de la Conferencia Sudamericana de Defensa (SOUTHDEC), llevada a cabo en Buenos Aires, donde advirtió que su objetivo es combatir a “las empresas chinas que capturan tierra, infraestructura crítica y sectores estratégicos como la energía y las comunicaciones”.

Además de advertir que estas “controlan la inteligencia militar y las instalaciones espaciales en todo este hemisferio” y amenazan los “puntos de acceso marítimo críticos como el Canal de Panamá, que es vital para la economía de cada nación”.

Las medidas de EE.UU. para ganar influencia en la región tienen sentido ante el avance de China en las últimas décadas, convirtiéndose este último en el principal socio comercial de la región, sobre todo en lo que refiere a materias primas; como así también las relaciones crecientes en ámbitos diplomáticos, militares y tecnológicos.

En los últimos meses, varias empresas chinas avanzaron con acuerdos ligados principalmente al desarrollo energético. En Nicaragua, con la construcción de una planta de energía solar por parte de China Communications Construction Company Limited

(CCCC); o en Ecuador, con la concesión operativa de Coca Codo Sinclair, la central hidroeléctrica más grande del país, a la firma PowerChina, sólo por nombrar algunos de ellos.

También el transporte y la logística son fundamentales para las cadenas globales de valor. Ante la negativa de poder adquirir el Canal de Panamá, las empresas apuntan a crear alternativas que reduzcan los costos de transporte en América del sur.

En ese sentido, en junio de este año los gobiernos de Brasil y China llegaron a un acuerdo para reimpulsar la construcción de un tren bioceánico que conecte los puertos de Açu, en el Atlántico, y el de Chancay, Perú, en el Pacífico. El mismo fue ratificado en la cumbre de los BRICS, llevada a cabo en Río de Janeiro en julio.

Dicha iniciativa se suma al Corredor Vial Bioceánico que busca conectar la costa sur de Brasil con los puertos del norte de Chile, pasando por Paraguay y Argentina, aunque los países no avanzaron aún en un acuerdo que comience las operaciones.

La estrategia de este bloque también busca socavar la hegemonía norteamericana en las finanzas de la región. En el encuentro plantearon la necesidad de una “nueva moneda” para transacciones comerciales y el fortalecimiento del Banco de Desarrollo del BRICS, como “prueba de que una arquitectura financiera reformada es viable”.

En la 66° cumbre del Mercosur, realizada en junio en Argentina, “Lula” da Silva, presidente de Brasil, había declarado que estos corredores fortalecerán su “participación en las cadenas globales de valor” y obtendrán “beneficios de una mayor aproximación con Japón, China, Corea, India, Vietnam e Indonesia”.

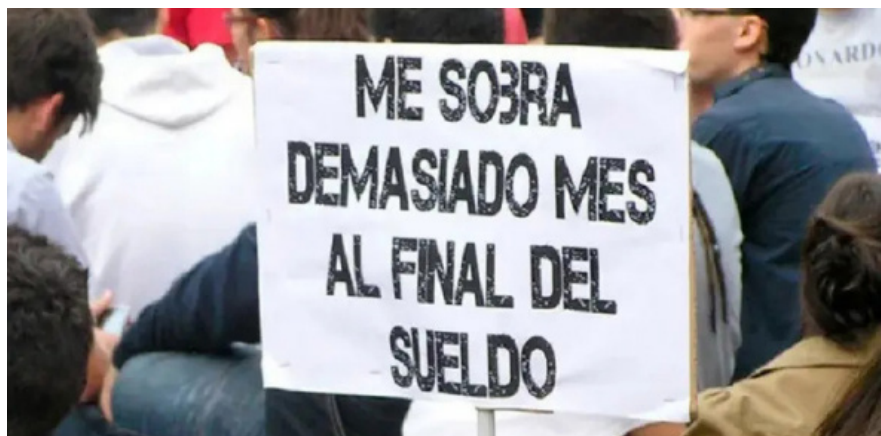
Aún sin concluir el encuentro, Trump advirtió en la red social “X” que “cualquier país que se alinee con las políticas antiamericanas de los BRICS deberá pagar un arancel adicional del 10%”.

De esta manera, el movimiento de tropas, el comercio y la diplomacia se alinea con la disputa principal que los distintos proyectos de poder mundial llevan a cabo, y de la cuál es imposible prescindir para comprender la realidad de Latinoamérica.

MOVIMIENTO

La era de la depresión del salario

Repasamos algunos datos recientes que dan cuenta del deterioro de los ingresos de los trabajadores en la actualidad.



SALARIO MÍNIMO. Desde 2024 es menos de la mitad que en 2015 y es más bajo que en los años noventa.

La semana pasada la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) difundió un informe titulado “La evolución del empleo y de los ingresos laborales a veinte meses del gobierno de La Libertad Avanza”, elaborado por el IPyPP y el IEF.

Según se desprende del mismo, la estrategia del gobierno nacional puede ser interpretada en tres etapas. La primera a partir de la devaluación del 100% ejecutada en diciembre del 2023 considerada “etapa fundacional”. La misma pulverizó los ingresos independientemente del sector de ocupación.

Luego, describió una segunda etapa que permitió una leve recomposición en la medida en que bajó la inflación, y la tercera, aún vigente, caracterizada por el ancla salarial que permite sostener la situación cambiaria.

Analizado por sectores, entre noviembre de 2023 y junio de 2025, el ingreso promedio del sector privado registrado cayó 0,6%. Aunque observado en perspectiva histórica, el salario real privado de mayo de 2025 se ubica 13,3% por debajo del nivel de diciembre de 2017.

Mientras que el sector público, en cambio, sufrió una caída del 14,3% entre noviembre de 2023

y junio de 2025, “consolidando la mayor pérdida relativa de todo el período analizado”.

“En conjunto, el total registrado cayó un 5,5%, reflejando que el ajuste recayó de forma mucho más intensa sobre el empleo estatal que sobre el privado”, plantea el documento.

Más allá de la foto actual se visualiza una caída del salario real desde diciembre del 2017 al presente dando cuenta de una depresión salarial de 8 años consecutivos.

Por otra parte, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) presentó un documento en el que registraron los motivos de los conflictos laborales en el sector industrial como otra característica de la situación de los trabajadores.

De los casos relevados se desprende que el 72,2% es motivado por despidos, le siguen suspensiones (14,8%) y otro tipo de conflictos (13%), entre los que se encuentran atrasos salariales, cierres, quiebres y venta de empresas.

En este contexto quedó fijado el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) de septiembre en \$322.200 para 48 horas semanales, o \$1.610 por hora. El SMVM establece la base de los ingresos de los trabajadores formales y por el cual se calcula el monto de prestaciones sociales y programas de asistencia.

Además, el documento de CIFRA, publicado a finales de agosto indica que el salario mínimo se ubicó para el mismo mes en un nivel real que resulta 43,4% más bajo que en noviembre de 2019, al final del gobierno de Cambiemos, y 56,7% menor que en noviembre de 2015.

“Si el salario mínimo no hubiese perdido poder de adquisitivo a lo largo de esta década, superaría actualmente los \$ 740.000”, consideran los analistas. En síntesis, “el valor real del salario mínimo es inferior al que rigió durante la mayor parte de la década de 1990”, sentenciaron.

Presos por protestar

En medio de una manifestación por alimentos, 15 militantes fueron detenidos, entre ellos, el secretario general de ATE, Federico Giuliani quien fue liberado luego de 4 días de reclamos.

El jueves 28 la CTA Autónoma y la Federación Nacional Territorial (FeNaT) llevaron a cabo una manifestación en la sede de la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba para reclamar por la falta de alimentos y otros insumos en comedores populares.

La iniciativa desató un conflicto entre los manifestantes y la policía de Córdoba, que terminó

con 15 personas detenidas. Entre ellas, el secretario provincial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Federico Giuliani y la secretaria adjunta de la CTA Córdoba, Silvia Alcoba.

Al momento de la detención, Giuliani difundió un video en redes sociales en el cual denunció que “hubo un operativo desmedido que reprimió a los compañeros”. “Nos están trasladando al Tribunal N°1 y

estamos pidiéndole a todos los compañeros y compañeras del campo popular que lleguen ahí para que nos liberen, porque protestar es un derecho, no un delito”, enunció.

Todos los detenidos fueron liberados por la madrugada, a excepción de Giuliani. Ante este hecho, diferentes organizaciones repudiaron las medidas y responsabilizaron a la “policía de Llaryora”. Además organizaron reclamos incluyendo un acampe frente a Tribunales II y un paro nacional de ATE.

El ministro de Seguridad en la Provincia, Juan Pablo Quinteros, alegó en conferencia de prensa que “se vienen tiempos complicados en términos de la conflictividad social” y negó excesos en el

accionar de la Policía de Córdoba.

Luego de 4 días finalmente liberaron al dirigente. “Vamos a seguir enfrentando la criminalización de la protesta social de Milei, Llaryora y en todo el país”, declaró desde el acampe frente al Polo Judicial de Córdoba Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. Allí estuvieron presentes miembros de la CTA y ATE de Villa María.

“Protestar es un derecho, el derecho madre que nos permite conseguir condiciones de vida dignas: salario, ayuda social. Pero en una Córdoba alineada a las políticas fascistas de Milei parece que manifestarse o expresar una bronca sobre ciertas situaciones es un delito”, expresó Giuliani luego de su liberación.

GOBIERNO

La libertad no alcanza

El Gobierno anunció la intervención del Tesoro en el mercado para frenar la corrida cambiaria, poniendo punto final a la política de libre flotación.



INTERVENCIÓN. Se estima que el Tesoro vendió más de 500 millones de dólares para que su cotización no se acerque al techo de la banda cambiaria.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció el pasado martes a través de X que el Tesoro Nacional "participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento".

Al día siguiente, en una entrevista televisiva, el funcionario afirmó que "no hay rotura del esquema cambiario ni del esquema de bandas" y argumentó que las medidas

responden a "situaciones puntuales", como la intervención de un banco "de origen chino" que "trató de levantar el precio del dólar \$40".

Esta decisión se da en un escenario de recientes escaladas en la cotización del dólar, las tasas de interés y diferentes medidas que viene aplicando la gestión, como la suba de los encajes bancarios, tras el desarme de las letras de liquidez (LEFIs). Desde

el 1 de septiembre, el BCRA elevó del 50% al 53,5% el porcentaje de fondos que los bancos deben inmovilizar. En julio, este porcentaje era del 40%.

Además dispuso que las entidades podrán integrar esos 3,5 puntos extra con títulos del Tesoro para la licitación que se realizó el pasado 26 de agosto, en la que se renovó el total de la deuda en pesos del mes y pudo absorber \$1 billón extra hasta después de las próximas elecciones. Para lograrlo debió aceptar tasas de interés de hasta 75,66% anual.

Para Ignacio Morales, de Wise Capital, "esto dejó a las entidades frente a una disyuntiva: aceptar rendimientos nulos sobre una proporción mayor de los pesos que deben mantener inmovilizados o volcarlos hacia los bonos".

El director del Banco Central, Federico Furiase, afirmó que lo anunciado no implica "ningún volantazo". "Al Fondo le pareció genial que sea transparente y que se avise al mercado. Está al tanto de esto. Esto lo podemos hacer

porque tenemos un programa de estabilización que nos permite blindarnos ante cualquier ataque político", añadió.

En este marco, el JP Morgan redujo su proyección de crecimiento para la Argentina en 2025, a causa de "la desaceleración de la economía en el segundo trimestre, la volatilidad de las tasas y la incertidumbre electoral". La entidad prevé este año un crecimiento del 4,7% en vez del 5,3% proyectado originalmente.

Por otro lado, el Morgan Stanley, en un informe titulado "El imperio contraataca", señaló que los inversores están en un momento de incertidumbre en torno a las recientes políticas cambiarias, que recuerdan a la gestión anterior y "contradicen la narrativa del presidente Milei sobre la reforma regulatoria".

"Los riesgos se hacen ahora más evidentes para los inversores de renta variable, ya que se necesitan tasas de interés altas para defender la banda cambiaria autoimpuesta por el Gobierno", sentenció.

La verdadera campaña

A días de las elecciones, el presidente Milei visitó a empresarios en búsqueda del voto del mercado.



INVERSIONES. El gobierno busca el apoyo de los empresarios norteamericanos.

El pasado 4 de septiembre el presidente Javier Milei realizó su viaje número 11 a Estados Unidos, acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el embajador argentino,

Alejandro Oxenford.

Durante la noche del jueves acudió a un hotel en Beverly Hills para reunirse con 80 empresarios e inversionistas. El encuentro fue coorganizado por la embajada

argentina en EE.UU. y el Instituto Milken (del empresario Michael Milken).

La cita formó parte de la estrategia del Gobierno para atraer inversiones y consolidar vínculos con el establishment norteamericano, especialmente en sectores como energía, finanzas y tecnología.

Se hicieron presentes representantes de Globant, Citi, J.P. Morgan, East West Bank, Pimco, Panda Express; las Cámaras de Comercio de Los Ángeles y de Beverly Hills; entre otros grupos bancarios y fondos de inversión norteamericanos.

Ante ellos, el mandatario prometió que "continuará con el camino de la desregulación y de apertura con firmas extranjeras".

"Si nosotros consideramos al empresario un benefactor social que genera riqueza sirviendo al prójimo, no podemos dejarlo a merced jurídica de futuros degenerados fiscales que quieran atentar contra su propiedad", aseguró Milei.

El ministro Caputo publicó en su cuenta de X: "Excelente nuestro presidente @JMilei representando al país antes los más grandes inversores del mundo. Enorme admiración por lo conseguido en estos 20 meses. El interés que hay por invertir en nuestro país es inmenso!!".

El mandatario también mantuvo una reunión privada con Mark Nelson, vicepresidente de Chevron, que es clave en las intervenciones de Vaca Muerta en Argentina.

INTERNACIONAL

Encrucijada de la gobernanza global



SITUACIÓN. Denunciaron que la economía mundial “está sufriendo graves trastornos”.

Se llevó a cabo la 25ª cumbre de la Organización de Shanghai (OCS) en China, con la presencia de Rusia, India y Turquía. Declararon la necesidad de “reformular el sistema de gobernanza global” en oposición al unilateralismo.

Del 29 de agosto al 1 de septiembre se realizó la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) con la presencia de jefes de Estado de 20 países, entre los que se encontraban Rusia, India, Irán y Turquía.

Además participaron como invitados Pakistán, Kirguistán, Kazajistán y Bielorrusia,

entre otros, y miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) como Vietnam, Tailandia, Camboya, Laos y Malasia. También estuvo presente el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres.

“La gobernanza global ha llegado a una nueva encrucijada”, dijo a la prensa el anfitrión Xi

Jinping, presidente de China. El mandatario señaló que su objetivo es “seguir derribando barreras” para “impulsar una globalización económica inclusiva y beneficiosa para todos”.

En el discurso inaugural, Xi instó a los países a “acatar el estado de derecho internacional”, aunque destacó la necesidad de “reformular y mejorar el sistema de gobernanza global” para “oponernos al unilateralismo”.

Declaración final

Los participantes adhirieron a una declaración en la que reafirmaron “la voluntad de crear un orden mundial multipolar más justo” ante un escenario donde se “intensifican los enfrentamientos geopolíticos, los desafíos y las amenazas para la seguridad y la estabilidad”.

“La economía mundial, en particular los mercados internacionales de materias primas y los mercados financieros, está sufriendo graves trastornos”, reza el documento. Por ello, entre las medidas propuestas, mencionan la necesidad de “crear en Eurasia un espacio de cooperación amplio” que articule políticas con la “Unión Económica Euroasiática, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y

otros Estados y asociaciones multilaterales interesados”.

Además definieron a los aranceles impuestos por EE.UU. como “medidas coercitivas unilaterales”, y se opusieron a ellos debido a que “perjudican los intereses de la seguridad internacional”.

Según la declaración, este tipo de medidas “tienen un impacto negativo en la economía mundial, perjudican la competencia leal, obstaculizan la cooperación internacional y la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas”.

A su vez, buscan promover una reforma de la arquitectura financiera “destinada a aumentar la representación y el papel de los países en desarrollo en los órganos de las instituciones financieras internacionales, en particular el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Fondo Monetario Internacional”.

También subrayaron la importancia de “aumentar progresivamente la proporción de monedas nacionales” en las transacciones comerciales, la creación de un Banco de Desarrollo de la OCS, y el fortalecimiento de la Unión Interbancaria (UIB), que ya cuenta con 20 años de funcionamiento.

Virando a oriente

En el marco de la visita de Putin a Pekín, las estatales energéticas de Rusia y China acuerdan proyectos para aumentar el suministro de gas al país asiático.



ENERGÍA. Alexei Miller (Gazprom) y Dai Houliang (CNPC) durante una reunión en julio pasado.

La estatal rusa Gazprom anunció el martes pasado la firma de un acuerdo con la Corporación Nacional de Petróleo de

China (CNPC) para la construcción de los gasoductos Poder de Siberia 2 y Soyuz Vostok a través de Mongolia.

El primero de ellos suministrará 50.000 millones de metros cúbicos de gas al año desde el oeste de Rusia hasta el norte de China.

A su vez, el acuerdo contempla el aumento del flujo de gas a través de los gasoductos Poder de Siberia (+6.000 millones de metros cúbicos) y la ruta del Lejano Oriente (+2.000 millones).

“Será el proyecto de gas más grande, más extenso y con mayor inversión de capital del mundo”, dijo Alexéi Miller, CEO de Gazprom.

En los primeros ocho meses de 2025, Gazprom ha suministrado alrededor de 26.000 millones de metros cúbicos de gas a la nación asiática, representando un aumento del 28,3%, según informó

Miller.

El gasoducto Fuerza de Siberia, puesto en marcha en 2019 y con una capacidad de 38.000 millones de metros cúbicos anuales, es la principal ruta de suministros de gas ruso a China.

En el mes de julio, Miller y su homólogo de CNPC, Dai Houliang, sostuvieron una reunión de trabajo en Beijing en la que “valoraron altamente el avance y las perspectivas de la asociación estratégica” entre las empresas.

Estos acuerdos señalan una reorientación de la estatal rusa, que desde el inicio de la guerra con Ucrania vio afectados sus ingresos procedentes de Europa, que representaban un 40% del total, a través de los gasoductos Nord

INTERNACIONAL

Escalada bélica entre Israel y Yemen



MISIL. Momento del ataque en el que Israel asesinó al primer ministro yemení.

Israel bombardeó una sede ministerial y mató al primer ministro yemení. Los hutíes respondieron con ataques aéreos y bombardeando un buque en el Mar Rojo.

La escalada bélica en Medio Oriente no cesa. La semana pasada acontecieron nuevos enfrentamientos potenciados por la política guerrillista del gobierno de Israel que busca mantener el conflicto armado en la región.

En ese marco, las Fuerzas

Armadas de Israel (FAI) atacaron una sede ministerial de Yemen en la que se encontraban reunidos funcionarios políticos, entre ellos el primer ministro.

"El Primer Ministro Hutí, Ahmed Al-Rahawi, junto con otros altos funcionarios del régimen

terrorista Hutí fueron eliminados durante un ataque de las FAI en Sanaa, Yemen", expresó la FAI en un comunicado.

"En las instalaciones atacadas se encontraban altos funcionarios responsables del uso de la fuerza, del aumento militar del régimen terrorista Hutí y del avance de las acciones terroristas contra Israel", ampliaron las FDI justificando el ataque.

Prosiguió la respuesta de los hutíes, quienes controlan el territorio yemení desde 2014, con un ataque mediante drones a Tel Aviv que fueron interceptados por los sistemas antimisiles.

Además, se atribuyeron un ataque por agua a un buque petrolero de bandera israelí en el Mar Rojo.

El portavoz militar hutí, Yehya Sarea, aseguró mediante un comunicado transmitido por canales de comunicación del movimiento que "el petrolero israelí Scarlet Ray fue alcanzado de manera directa en el norte del mar Rojo".

Además, el vocero militar anunció la intención de llevar a cabo "nuevas operaciones

militares contra intereses israelíes en la Palestina ocupada" y advirtió que estos operativos "no cesarán hasta que finalice la agresión contra Gaza y se levante el asedio sobre su población".

En simultáneo, realizaron un operativo de allanamiento de oficinas de dos agencias de la ONU en Saná: una del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y otra de Unicef.

Según reportó la agencia de noticias AFP, con declaraciones provistas por un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de los hutíes, "los empleados de las Naciones Unidas detenidos están acusados de espiar a favor de la agresión estadounidense e israelí, y toda persona cuya acusación sea confirmada será llevada ante la justicia".

Antonio Guterres, secretario general de ONU, condenó "enérgicamente las detenciones arbitrarias, el 31 de agosto, de al menos 11 funcionarios de las Naciones Unidas por parte de las autoridades de facto hutíes en Yemen en zonas bajo su control", declaró en un comunicado.

Fuertes protestas en Indonesia



RECLAMOS. Los enfrentamientos se extendieron por más de diez días.

Los diputados elevaron sus ingresos a un equivalente de 14.000 dólares al mes provocando intensas protestas de organizaciones sindicales y estudiantiles en todo el país.

El conflicto, iniciado el lunes 25 de agosto, escaló en intensidad con la intervención de las fuerzas de seguridad, desencadenando fuertes

enfrentamientos donde, según Amnistía Internacional (AI), al menos diez personas murieron.

Por su parte, la Comisión para los Desaparecidos y Víctimas

de Violencia (Kontras) informó que al menos 20 manifestantes permanecen desaparecidos.

El rechazo se intensificó de forma particular tras el asesinato de Affan Kurniawan, un joven conductor de la aplicación GoJek, atropellado por un vehículo blindado de la policía indonesia, cerca del Parlamento.

El 28 de agosto se realizó una movilización en frente al Complejo Parlamentario de Indonesia en Yakarta. "El Partido Laborista, junto con la Coalición de Sindicatos, se unió a 74 elementos del movimiento obrero, con una multitud estimada de entre 4.000 y 5.000 personas", dijo el presidente del Partido Laborista, Said Iqbal.

Iqbal explicó que la acción contó con la participación del Comité Ejecutivo Estudiantil (BEM) como otras organizaciones estudiantiles para reclamar por aumentos salariales.

Por su parte la Asociación de Estudiantes Islámicos de Indonesia emitió una declaración

instando a los diputados a "ser más receptivos en la lucha por las aspiraciones del pueblo" en un contexto de "oleadas de despidos, escasez de empleos, aumento de precios de productos básicos y cargas fiscales que estrangulan cada vez más la vida de la gente común."

El país asiático registra un crecimiento del PIB del 5,1% y un desempleo del 4,8%, pero el salario mínimo es de apenas 300 dólares.

En un intento por contener el descontento, el presidente Prabowo Subianto anunció la revocación de algunos "privilegios" de los diputados, "entre ellas las dietas y la moratoria sobre las visitas de trabajo al extranjero", declaró el mandatario.

En algunas de las principales ciudades del país, como Palembang, Banjarmasin, Yogyakarta, Makasar y Gorontalo, los manifestantes prendieron fuego edificios públicos y los congresos.

MOVIMIENTO

“Si hay veto, hay marcha”

El Congreso aprobó la Ley de Financiamiento Universitario y la comunidad universitaria prevé otra movilización federal en caso de un veto presidencial.



DESFINANCIAMIENTO. El último presupuesto aprobado para las universidades nacionales fue en 2023.

El mes de septiembre comenzó con un nuevo paro nacional de 48 horas en las universidades públicas de todo el país convocado por las federaciones de docentes universitarios Conadu y Conadu Histórica.

La medida forma parte de un plan de lucha que ya incluyó protestas y paros rotativos en los lugares de trabajo. Los reclamos se dan en paralelo a la reciente aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso, tratado el 21 de agosto, proyecto que resultó aprobado con 58 votos a favor, 10 en contra y 3 abstenciones.

En ese marco desde Tribuna dialogamos con Leticia Medina, secretaria general de ADIUC, el gremio de docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

La dirigente gremial contó que, actualmente “tenemos una caída del salario superior a más de un tercio”. “Para que nuestro salario valga como en noviembre del 2023, debíamos tener un aumento del 45%”, indicó Medina.

“Este año comenzamos el segundo cuatrimestre con una semana de paros rotativos y todo tipo de acciones que puedan seguir mostrando la situación crítica de las universidades y haciendo conocer a la ciudadanía que el conflicto universitario sigue profundizándose”, amplió.

Con respecto a la Ley de

Financiamiento, la secretaria de ADIUC indicó que la normativa significa una recomposición salarial docente ante el “brutal” ajuste como así también “de gastos de funcionamiento, y de la actualización de las becas estudiantiles que hoy son de 35 mil pesos” que no alcanzan



Leticia Medina
Secretaria general de ADIUC

“Para que nuestro salario valga como en noviembre del 2023, debíamos tener un aumento del 45%”

siquiera para “un par de apuntes”.

En octubre del 2024 el gobierno había vetado la Ley de Financiamiento, por lo que Medina advirtió que “si hay veto, habrá una marcha federal que va a ser una señal muy fuerte hacia el gobierno en vísperas de las

elecciones nacionales”.

En paralelo a las acciones desarrolladas por las federaciones, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) realizó un plenario de rectores en la Universidad Nacional de Rosario el pasado 30 de agosto.

El encuentro contó con la participación de 70 miembros del consejo, quienes aprobaron un proyecto para incorporar 7,32 billones de pesos al presupuesto 2026. El monto se actualiza y anualiza según lo establecido en 2023 que es el último presupuesto aprobado por el Congreso Nacional hasta el momento.

Del plenario también participaron representantes gremiales de docentes y no docentes. “Estamos viviendo una situación de anormalidad en las universidades. No tenemos recursos. Se nos caen los presupuestos”, denunció Carlos de Feo, secretario general de

Impacto en la región

Desde el gremio docente ADIUVM resolvieron extender las actividades de visibilización del conflicto debido a que su salario “continúa deteriorándose”. Las mismas se realizarán hasta el 14 de septiembre según lo resuelto por el último plenario de la FEDUN (federación a la que adhiere el gremio).

Además, desde la UNVM difundieron un estudio elaborado por el Observatorio Integral de la Región (OIR) que evidencia el impacto de la crisis salarial en la economía regional.

En cifras el informe precisa que 716 millones de pesos mensuales, 23 millones por día y casi 1 millón por hora dejaron de circular en la ciudad y región producto del desfinanciamiento.

“El dinero que no percibimos es el que dejamos de inyectar a nuestra ciudad, donde compramos alimentos, hacemos uso del transporte, alquilamos, ‘y pagamos impuestos”, comentó Dario Poncio, autor del informe, en una entrevista a un medio local.

El informe contempla la masa salarial desde noviembre de 2023 actualizada a julio 2025, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. Al comparar estos resultados con los sueldos promedios percibidos en dicho mes por la planta docente y nodocente de la UNVM se determina una pérdida real que supera el 30%.

“Las personas en contra de las medidas de fuerza y de las marchas federales en defensa de la educación superior deben saber que no nos movilizamos solamente por nuestros derechos como comunidad universitaria, sino por todas y todos los ciudadanos”, añadió Poncio.

CONADU.

El presidente tiene un plazo hasta el 11 de septiembre para ejecutar los vetos a las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica que afecta al presupuesto del hospital pediátrico Garrahan.